

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADSCRITOS A LOS CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DE VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características de las prestaciones objeto del contrato de referencia.

El objeto del presente contrato de servicios titulado **“PÓLIZA DE SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADSCRITOS A LOS CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DE VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES”**, es la realización de los servicios relacionados con la mediación de pólizas de seguro, comprendiendo la asistencia al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario del seguro, de acuerdo con lo previsto en RDL 3/2020 de 4 de febrero de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Esta prestación deberá acompañarse obligatoriamente de una oferta respaldada por una compañía aseguradora que suscriba el programa de riesgos de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El contrato actualmente vigente, suscrito con D.A.S. DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINIESTROS INTERNACIONAL, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, se formalizó el 24 de julio de 2019 y se ha prorrogado en tres ocasiones, por periodos anuales, hasta el plazo máximo indicado en los pliegos que vence el próximo 31 de agosto. Con el fin de mantener la cobertura del personal asegurado, constituido por el personal docente y de administración y servicios adscritos a los centros públicos de enseñanza no universitaria resulta justificada la necesidad de convocar un nuevo procedimiento para la adjudicación de una nueva póliza de seguro de defensa jurídica, cuyo contrato entre en vigor el 1 de septiembre de 2023.

El presente procedimiento tiene por objeto la contratación de los servicios de una compañía aseguradora que opere en el sector de Defensa Jurídica, por tanto estableciendo el carácter potestativo de que esta entidad preste sus servicios de mediación directamente o a través de un mediador de seguro, ya se trate de un corredor o de un agente de seguros.

En relación con la determinación del precio de licitación, cabe señalar que al procedimiento de 2019 se presentó una única oferta, la de la empresa D.A.S. DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINIESTROS INTERNACIONAL, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, ofertando una prima anual de 27.100,00 sobre un precio de licitación de 40.000 euros.

En base a esta información, se propone que el precio de licitación del presente contrato ascienda a 40.000 euros, con el fin de garantizar la concurrencia.

De conformidad con lo dispuesto en el DECRETO 38/2022, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, y por su parte el DECRETO 236/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de

Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, que establece en el artículo 19 que las competencias en materia de la gestión del personal funcionario docente, así como del personal funcionario y laboral no docente adscrito a los centros públicos docentes no universitarios se ejercen a través de la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que la ejecución de dicho contrato corresponde a esta Dirección General.

En consecuencia, se entiende justificada la necesidad e idoneidad del contrato, dando cumplimiento a lo exigido por el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

El Director General de Recursos Humanos

Miguel José Zurita Becerril